



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN
TERCERA**

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinte 2020

| | |
|--------------------------|--|
| Juez : | Álvaro Carreño Velandia |
| Ref. Expediente : | 1100133343064-2020-00080-00 y |
| Accionante : | Gilberto Reyes Rinta |
| Accionada : | Nación- Presidencia de la República y Distrito Capital de Bogotá. |

**ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA No. 27**

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a emitir fallo de primera instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por **Gilberto Reyes Rinta** en contra de la Presidencia de la República y el Distrito Capital de Bogotá, a efectos de proteger sus derechos fundamentales al mínimo vital y dignidad humana, en la medida, según lo aduce, por las medidas adoptada para contrarrestar la pandemia generada por el COVID-19, no ha podido salir a laborar como vendedor informal, por lo que no cuenta con ingresos para garantizar su subsistencia sumado a que no ha recibido ninguna de las ayudas anunciadas por el gobierno nacional ni distrital.

1.1. Hechos y Pretensiones

El señor Gilberto Reyes Rinta, señaló que es una persona de 59 años que trabajaba como vendedor informal de sombrillas y cosmetiqueras en la calle 12 C entre carreras 7 y 8 de la localidad 17 de Bogotá.

Indicó que depende en forma exclusiva de la venta ambulante de sus productos, ya que no cuenta con ningún otro ingreso y en la actualidad no ha sido beneficiario de la asistencia social prometida por el gobierno Nacional y Distrital.

Argumentó que con la expedición del Decreto Distrital No 090, a través del cual se limitó la movilidad de persona y vehículos y el Decreto 531 del 2020 expedido por el Gobierno Nacional, en el que se ordenó el aislamiento

110613345064-2020-00080-00 y
Gilberto Reyes Renta
Nación- Presidencia de la República y Distrito Capital de Bogotá.

preventivo obligatorio, no ha podido volver a laborar desde el 20 de marzo de los cursantes, por lo que en la actualidad se encuentra sin recursos económicos para garantizar su mínimo vital por lo que también considera se está amenazando su dignidad humana.

Por lo que solicitó se le amparen sus derechos fundamentales al mínimo vital y dignidad humana y se le entreguen de forma efectiva e inmediata la ayuda humanitaria para sufragar sus necesidades básicas mientras dure el aislamiento social decretado; y se le entregue una renta básica sin condicionamientos para satisfacer su mínimo vital.

1.2. Trámite en esta instancia

En auto del 23 de abril de 2020, se admitió la tutela contra la presidencia de la República y el Distrito Capital de Bogotá, y vinculó al Instituto Para la Economía Social IPES, y se ordenó notificar al Presidente de la República a través de Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la Alcaldesa Mayor de Bogotá y al Director del Instituto para la Economía Social IPES, concediéndoseles dos días para que se pronunciaran respecto de los hechos de la tutela.

La acción de tutela fue notificada en debida forma a las accionadas y vinculada el 23 de abril de 2020, tal como consta en el plenario.

1.3. De la contestación de la acción

1.3.1- Presidencia de la República

A través de apoderada judicial, la Presidencia de la República argumentó que ninguna de las circunstancias señaladas por el accionante en su escrito de tutela dan a entender que su situación y carga es distinta a la que la mayoría de los colombianos de toda condición social esté soportando en mayor o menor medida.

Señaló que el amparo solicitado es improcedente por cuanto se fundamenta en suposiciones hipotéticas de conclusiones subjetivas frente a los efectos personales por la decisión de protección de la vida del aislamiento con ocasión a la pandemia mundial generada por el COVID - 19, que no han sucedido aún y que contrarían la naturaleza reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional sentencia de sede de tutela del Tribunal Constitucional en sede de tutela T-433 de 3 de julio 2014, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, Expediente T-4.245.188, en el que se indicó que el amparo de tutela no puede ser concedido para contener o precaver situaciones que aún no han tenido lugar ni han ocurrido.

Solicitó que se desvincule al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al señor Presidente de la República de la acción de tutela; en su defecto, se declare improcedente el amparo solicitado, toda vez que no existe ningún hecho u omisión atribuible al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al señor Presidente de la República, frente a quien pueda predicarse una afectación de los derechos fundamentales invocados.

1.3.2.- Distrito Capital- Secretaría de Integración Social

A través del Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Integración Social, dio contestación a la acción de tutela manifestando que dentro de sus proyectos para la atención se encuentra el Proyecto 1092 " Viviendo el Territorio" el cual cuenta con un servicio llamado "Enlace Social", que tiene como objetivo atender a personas hogares o familias en pobreza o vulnerabilidad que tiene dificultad para enfrentar situaciones sociales imprevistas y transitorias que desestabilizan o disminuyen su capacidad de respuesta, debido a diferentes factores de riesgo asociados que generan crisis o emergencia social; en el cual se proporciona un bono de alimentación y si la profesional del servicio, evidencia que la situación que origina la crisis o emergencia social persiste, o si la emergencia social asociada a calamidad pública con ocasión de la pandemia denominada COVID-19 conlleva a que en el hogar continúe la situación de vulnerabilidad, sin ingresos económicos para cubrir los gastos de alimentación, se hace acompañamiento a la accionante, para que en consecuencia, se le entregue nuevamente otro bono de emergencia.

En garantía de los derechos del accionante y una vez recibida la acción de tutela, la Subdirección para la Identificación y Caracterización de la Dirección Territorial de la Secretaría de Integración Social, realizó la correspondiente atención, donde se indicó por intermedio de la profesional del proyecto 1092 "Viviendo el Territorio" , que el día de hoy 27 de abril se comunicó con el señor GILBERTO REYES RINTA para la realización de la entrevista ciudadana y el diligenciamiento de ficha SIRBE, en las modalidades atención inicial y emergencia social, con la finalidad de otorgar ayuda humanitaria transitoria consistente en un (1) Bono de emergencia.

Como resultado de la referida atención, la profesional logró identificar que el señor GILBERTO REYES RINTA y su núcleo familiar, se encuentran en emergencia.

En consecuencia, ya se envió la información a través de correo electrónico a la persona encargada en la Subdirección local para la Integración Social de Santa fe - Candelaria, esto con el ánimo de realizar la digitación en el sistema misional SIRBE, y posteriormente, se efectuará la activación en la

plataforma "PROCESSA", a fin de que el bono quede en estado activo; de manera tal, que a partir del siguiente día, el beneficiario pueda canjear su bono en el almacén de cadena que se le informe.

Ahora bien, una vez canjeado el bono por el señor GILBERTO REYES RINTA, el estado de la atención en SIRBE se encontrará en "OTORGADO", situación ante la cual la profesional del servicio en atención al procedimiento establecido previamente, se encargará de realizar las siguientes actuaciones: 1. PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO: Con el fin de garantizar los derechos del beneficiario y 2. ACOMPAÑAMIENTO: Si la profesional evidencia que la situación que origino la crisis o emergencia social persiste, o si la emergencia social asociada a calamidad pública con ocasión de la pandemia denominada COVID-19 conlleva a que en el hogar continúe la situación de vulnerabilidad, sin ingresos económicos para cubrir los gastos de alimentación, al finalizar el mes, la profesional del servicio citara acompañamiento al accionante, para que en consecuencia, se le entregue nuevamente otro bono de emergencia.

Indicó que el INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL -IPES-, dentro del marco de sus competencias, como Institución que brinda ayuda social a los vendedores informales es la competente para otorgar la ayuda que solicita el accionante, por lo que solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los derechos fundamentales invocados por el accionante no están siendo vulnerados por la Secretaría Distrital de Integración Social, aunado al hecho de que no forman parte de su misionalidad.

Solicitó desestimar la acción impetrada por falta de legitimación en la causa por pasiva, o en su defecto declarar que la Secretaría Distrital de Integración Social no ha incurrido en violación a los derechos fundamentales reclamados por el Accionante.

1.3.2.- El Instituto para la Economía Social IPES

A través de la Subdirectora de la Subdirección Jurídica y de Contratación del Instituto para la Economía Social -IPES-, dio contestación a la acción de tutela, indicando que consultada la base de datos del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI, se estableció que el señor accionante GILBERTO REYES RINTA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.078.051, se encuentra registrado como vendedor informal de la localidad de la Candelaria, desde el día 10 de octubre de 2012.

Indicó que el decreto 093 de 2020, creó el sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa; y que no le consta a la entidad que el accionante esté inscrito en subsidios en especie.

Además, en el marco de la estrategia Bogotá Solidaria en Casa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto para la Economía Social – IPES – adelantó varias acciones para beneficiar a la población de la economía informal, diseñó y publicó en la página web www.ipes.gov.co un formulario de inscripción para los vendedores informales, con este se actualizó la base de datos de esta población para luego otorgarles beneficios como: transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes - servicios y subsidios en especie.

Argumentó que los programas misionales del IPES, se agotan de manera individual y personalizada, para el caso del señor GILBERTIO REYES RINTA, se debe dirigir a la página web www.ipes.gov.co para que actualice sus datos personales, para luego filtrar la información con las dependencias distritales encargadas de incluirle en los planes de beneficios, pues consultada la base de datos GOOBI, aplicativo utilizado para la radicación de las comunicaciones oficiales que ingresan a la entidad, se encontró que el señor GILBERTO REYES RINTA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.078.051, no ha radicado solicitud, petición o requerimiento en el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 23 de abril de 2020.

Consideró que el accionante no presentó pruebas en la tutela de la afectación a los derechos de mínimo vital, la dignidad humana, descritos en el libelo de la acción, así como tampoco presentó prueba de haber dado noticia de esto a la entidad.

Estimó que el IPES no ha vulnerado los derechos fundamentales que alega el accionante, toda vez que ha desarrollado las actividades necesarias tanto de carácter administrativo como misional para dar cumplimiento a la normatividad vigente, sin desconocer los principios y derechos consignados en la Constitución Política Nacional.

Solicitó desvincular a Instituto Para la Economía Social – IPES- de la acción de tutela o en su defecto rechazar, negar o decidir desfavorablemente las pretensiones de la presente acción de tutela en tanto el accionante no se encuentra legitimado por activa para ejercer la tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1.- Competencia

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1382 de 2000 y el Decreto 1983 de 2017, este Despacho es competente para conocer y decidir el asunto.

2.2.- Problema Jurídico

Establecer si se han vulnerado los derechos fundamentales al mínimo vital y dignidad humana del accionante, por parte de la **Presidencia de la Republica, Distrito Capital de Bogotá y el Instituto para la Economía Solidaria IPES**, en la medida que según lo adujo no ha recibido las ayudas anunciadas por el gobierno Nacional y Distrital para conjurar el estado de necesidad en que se encuentra debido a la imposibilidad de salir a laborar por el aislamiento preventivo obligatorio decretado por la emergencia sanitaria a causa del Covid 19.

Para resolver los anteriores cuestionamientos, el Despacho tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

2.3.- De las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital para afrontar la emergencia sanitaria por la pandemia mundial por COVID-19

El **6 de marzo de 2020** el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional.

El **9 de marzo de 2020** la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.

El **10 de marzo de 2020** el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 380 adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigor de esa resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España.

La OMS el **11 de marzo de 2020** declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de transmisión, toda vez que a esa fecha se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos confirmados.

El **12 de marzo de 2020** mediante Resolución 385, el Ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el **estado de emergencia** sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de

mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos entre las que se encuentran: Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y mercancías de las naves de pasaje de tráfico marítimo internacional.

Pese a las medidas adoptadas, el **17 de marzo de 2020**, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó como casos confirmados en Colombia 75 y a nivel mundial 180.159 casos, 7.103 número de muertes y 143 países con casos de contagio confirmados.

De acuerdo con lo señalado por la OMS, la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

Según la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, la población colombiana con mayor riesgo de afectación por la pandemia del nuevo coronavirus -COVID-19 sería de un 34.2% del total de la población.

El **17 de marzo de 2020** el Gobierno Nacional a través del **Decreto No. 417** declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional amparado en lo preceptuado por el artículo 215 Superior.

A través del Decreto 531 del 8 de abril de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia durante 14 días, a partir de las cero horas del 13 de abril y hasta las cero horas del 27 de abril, la norma limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con 35 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes del país. Medidas que fueron ampliadas por el **Decreto 593 del 24 de abril de 2020, por el cual se dispuso el aislamiento preventivo obligatorio del 27 de abril al 11 de mayo en todo el territorio nacional.**

A través del Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, se declaró en el Distrito capital de Bogotá la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19).

Por medio del Decreto 092 del 24 de marzo de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá ordenó el aislamiento obligatorio, del 25 de marzo al 13 de abril de 2020, exceptuando las profesiones y servicios necesarios para conjurar la pandemia, la circulación de solo una persona por núcleo familiar para abastecimiento, y se establecieron medidas de salubridad para el servicio de entrega a domicilio.

Mediante Decreto Legislativo 518 del 4 de abril de 2020, "Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", se creó el Programa Ingreso Solidario para trabajadores independientes e informales mediante el cual se entregarán transferencias monetarias no condicionadas en favor de las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección al Adulto Mayor, Jóvenes en Acción o la compensación del impuesto sobre las ventas- IVA por el tiempo que perduren las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

El Decreto Distrital No 093 de 25 de marzo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020" en su artículo 2 creó el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa para la contingencia social de la población pobre y vulnerable residente en la ciudad de Bogotá D.C.- sostenimiento solidario- en el marco de la contención y mitigación del COVID-19.

2.4- Derechos fundamentales vulnerados

2.4.1.- Derecho al mínimo vital

El mínimo vital entendido como el derecho a la garantía de los recursos mínimos necesarios para subsistir.

La corte constitucional ha definido el mínimo vital en los términos que se exponen a continuación:

" (...) 12. En conclusión, se pueden extraer las siguientes reglas constitucionales acerca del mínimo vital: (i) es un derecho que tiene un carácter móvil y multidimensional que no depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona; (ii) como herramienta de movilidad social, el mínimo vital debe ser entendido de manera dual, ya que además de ser una garantía frente a la preservación de la vida digna, se convierte en una medida de la justa aspiración que tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de manera más cómoda; y (iii) en materia pensional, el mínimo vital no sólo resulta vulnerado por la falta de pago o por el retraso injustificado en la cancelación de las mesadas pensionales, sino también por el pago incompleto de la pensión, más cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional"¹.

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-039-2017. Referencia: expediente T-5.788.327, Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, treinta (30) de enero dos mil diecisiete (2017).

2.4.2- Dignidad humana

La Corte ha determinado que la dignidad humana equivale: (i) al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Por tanto, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado.

El artículo 1º de la constitución política preceptúa la dignidad humana como uno de los tres pilares fundantes del Estado Social de Derecho. En cuanto establece: *"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general."* (Subrayado del despacho).

Respecto al objeto concreto de protección, la Corte Constitucional ha identificado tres lineamientos claros y diferenciables: *"(i) la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; (ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tortura"*².

2.5.- Caso en concreto

En el presente asunto el accionante consideró vulnerado su derecho al mínimo vital y a la dignidad humana por no haber recibido ayuda humanitaria anunciada por el Gobierno Nacional y Distrital con ocasión de la pandemia generada por el Covid 19.

Una vez analizadas las respuestas brindadas por las accionadas y la vinculada en la presente acción dentro del presente asunto, se tiene que por parte de la Secretaría de Integración Social, una vez se le notificó la acción de tutela, contactaron al señor Gilberto Reyes Rinta, a fin de verificar el estado de necesidad que decía padecer en su escrito de tutela y si cumplía con los requisitos para ser beneficiario de la ayuda humanitaria transitoria consistente en un (1) Bono de emergencia, y como resultado de la referida atención, la Secretaría de Integración Social identificó que el señor GILBERTO REYES RINTA, se encontraba en estado de emergencia; razón por

² Corte Constitucional T-291-16

la que fue ingresado al sistema misional SIRBE, de dicha Secretaría conforme al documento anexo al escrito de contestación, con el fin de que el accionante pudiera canjear su bono de emergencia en un almacén de cadena.


En este sentido encuentra el Despacho que frente la Secretaría de Integración Social, dicha entidad no ha vulnerado derecho alguno del accionante, toda vez que ha realizado las gestiones necesarias para que el señor Gilberto Reyes Rinta reciba el bono de emergencia para conjurar su estado de necesidad.

Lo anterior a pesar de que el accionante no elevó ninguna solicitud de ayuda ante dicha entidad, o por lo menos de esa circunstancia no existe prueba en el expediente.

Ahora bien de acuerdo con la respuesta suministrada por el Instituto de Economía Solidaria IPES, el señor Gilberto Reyes Rinta se encuentra inscrito como vendedor informal, en el Registro Individual de Vendedores Informales – RIVI, y que para que reciba las ayudas brindadas por el Gobierno Distrital, "Ingreso Solidario" debe diligenciar un formulario que encuentra en la página de internet www.ipes.gov.co; lo anterior toda vez que revisadas las bases de datos de dicha entidad no se encontró que el accionante hubiese solicitado ante el IPES la ayuda económica a través de la página web.

En el sub lite, considera el Despacho que de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Integración Social el accionante se encuentra en estado de necesidad por lo que dicha entidad tramitó la entrega de un bono de emergencia para a favor del accionante; Sin embargo frente a la entrega del bono solidario el IPES argumentó que el accionante no había actualizado sus datos en la página web de la entidad ni solicitado dicha ayuda por el mismo medio.

Sumado a lo anterior, este despacho consultó el sistema de giros realizados a la fecha dentro del programa ingreso solidario, y evidenció que el

GILBERTO
Primer Apellido
REYES
Fecha de expedición del documento
03/04/1979
☒ No soy un robot

Consultar
La identificación 3078051 no ha sido parte de las etapas cumplidas. Puede ser parte de las siguientes fases. Le pedimos vuelva a consultar la página con regularidad.

accionante no ha recibido la mencionada ayuda, (se anexa consulta) sin embargo y teniendo en cuenta que ya recibió la ayuda de emergencia por parte de la Secretaría de Integración Social conforme a la contestación que brindó esta entidad, no se ampararan los derechos conculcados como vulnerados pues considera el despacho que no se encuentren comprometidas las garantías mínimas de subsistencia; no obstante se instará al Instituto para la Economía Solidaria IPES, para que dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el accionante, evidenciada en la visita realizada por la Secretaría de Integración Social, realice las gestiones necesarias a fin de que el señor Gilberto Reyes Rinta logre postularse dentro del sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa, y en caso de cumplir los requisitos de ley para su entrega se priorice la misma.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

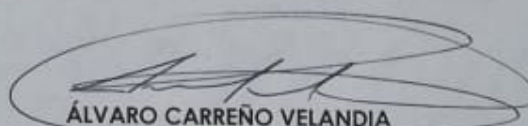
PRIMERO: Negar el amparo de los derechos al mínimo vital y dignidad humana del accionante Gilberto Reyes Rinta, conforme las razones aducidas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: INSTAR al Instituto para la Economía Social -Ipes para que realice las gestiones necesarias a fin de que el señor Gilberto Reyes Rinta logre actualizar sus datos y postularse dentro del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa, y en caso de cumplir los requisitos de ley para la entrega de la ayuda se priorice la misma.

TERCERO: Por Secretaría, notificar el presente fallo en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En firme la presente providencia, y en el evento en que no fuere impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁLVARO CARREÑO VELANDIA
Juez

ms